

Crisis de gobernabilidad y la región Andina: un análisis de economía política¹

Andrés Solimano R.²

Abstract

The Andean region of Latin America is experiencing governance and economic difficulties that compound its structural problems of poverty, slow growth and social inequality. Governance problems are manifested through a high frequency of political crisis, high turnover of authorities, weak institutions and fragility of democracy. An analytical framework is proposed that focuses on: i) the content and stability of political and constitutional regimes, ii) the quality of institutions, iii) social inequality, and ethnic diversity. The focus of the paper is mainly on how to characterize governance patterns rather than on providing a detailed analysis of the channels through which governance conditions affect economic growth. The empirical analysis of the paper combines long run evidence on the frequency of constitutional reform, presidential crisis, and political regimes of the Andean region in the 20th century along with more recent subjective indicators of governance and institutional quality in the 1990s and early 2000s.

Resumen

La región andina está experimentando dificultades económicas y de gobernabilidad que agravan sus problemas estructurales de pobreza, lento crecimiento y desigualdad social. Las dificultades de gobernabilidad de la región andina se manifiestan en la alta rotación de las autoridades, debilidad institucional, crisis políticas recurrentes y fragilidad de la democracia. El enfoque de análisis propuesto se centra en 3 conjuntos de variables: i) las principales características y la frecuencia de cambio de los regímenes políticos y constitucionales, ii) la calidad de las instituciones, iii) la desigualdad social y diversidad étnica, como elementos determinantes de las condiciones de gobernabilidad de los países Andinos. El análisis empírico del trabajo combina evidencia histórica (para el siglo XX) y reciente sobre la frecuencia de las reformas constitucionales, las crisis presidenciales y los regímenes políticos con índices subjetivos recientes de calidad institucional y gobernabilidad publicados por varias instituciones.

Keywords: Governance, political regimes, quality of institutions, economic growth, inequality and ethnic diversity.

Palabras claves: gobernabilidad, regímenes políticos, calidad de las instituciones, crecimiento económico y diversidad étnica. Clasificación JEL: 010, 015, 040, 054, P26.

¹ Este documento es parte de un proyecto de economía política de la región andina co-ejecutado por Cepal y el Diálogo Interamericano con el apoyo financiero de la Fundación Ford. Este estudio se ha presentado en seminarios en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, New School University y Universidad de París 3, Nouvelle Sorbonne.

² Asesor Regional: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. Se aprecia la muy eficiente asistencia de investigación de Claudio Aravena y los comentarios de Enrique García, Fidel Jaramillo, Peter Hakim, José Antonio Ocampo y Carol Graham además de participantes en los seminarios indicados.

I. INTRODUCCIÓN

La región andina está experimentando dificultades económicas y de gobernabilidad que agravan sus problemas estructurales de pobreza, moderado crecimiento y desigualdad. Las dificultades de gobernabilidad de la región andina se manifiestan en la alta rotación de las autoridades, debilidad institucional, crisis políticas recurrentes y fragilidad potencial de la democracia. Además, el problema de violencia es serio en algunos de los países, como Colombia en donde más de 40.000 personas mueren cada año por causas violentas (políticas y criminales) mientras el país atraviesa por un conflicto interno de más de cuatro décadas. En otros países de la región la violencia política no ha estado ausente (e.g. Bolivia en el periodo precedente a la renuncia de Sánchez de Losada).

En los últimos años han ocurrido varias crisis políticas (o de gobernabilidad) en la región andina. Recientemente, en octubre de 2003, el presidente Boliviano Sánchez de Losada fue forzado a renunciar siguiendo una serie de protestas sociales encabezadas por grupos indígenas y campesinos. Estos hechos evidencian la creciente importancia del sector indígena como actor social en Bolivia. En Venezuela en abril de 2002, un fallido golpe de estado tuvo lugar donde el presidente Chávez fue temporalmente destituido del poder para recobrar la presidencia un día después en una serie de eventos confusos que involucraron a militares y líderes de la asociación empresarial más importante del país. En Ecuador, en enero de 2000, un presidente elegido democráticamente, Jamil Mahuad, fue depuesto por los militares después de una sublevación indígena. Una junta militar-indígena tomó el poder por algunas horas entregándolo después bajo fuerte presión internacional, al vicepresidente Gustavo Noboa. En 2000, el presidente de Perú Alberto Fujimori,

salió del país y renunció, desde el exterior, después de un escándalo de intimidación política y corrupción que involucraba a su jefe de seguridad Vladimiro Montesinos.

El desempeño económico de estos países ha sido afectado por problemas de gobernabilidad e inestabilidad. En los años noventa, la tasa promedio de crecimiento económico para los cinco países andinos³ (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) ha sido menor a la tasa de crecimiento de la región Latinoamericana. A nivel de países, Colombia ha visto un deterioro de su economía (históricamente estable) desde la mitad de los años noventa. Ha sido un período de lento crecimiento del producto nacional y vulnerabilidad financiera y externa. Ecuador sufrió una severa crisis económica y financiera en 1998-1999, con depreciaciones cambiarias, aumento vertiginoso de la inflación y una crisis del sistema bancario. La solución para la estabilización fue un cambio radical en el régimen monetario y la adopción del dólar estadounidense como la moneda oficial a principios del año 2000 (Beckerman y Solimano, 2002). La dolarización consiguió, gradualmente, bajar la inflación y estabilizar las expectativas restableciendo la confianza y permitiendo una recuperación del crecimiento económico en los últimos tres años. En Perú, la turbulencia política asociada a la desaparición del régimen de Fujimori afectó el crecimiento en 2001 aunque este se recuperó en 2002 y 2003. Venezuela ha registrado unas caídas muy severas del producto nacional en 2002 y 2003 (acumuladas de 22 por ciento) asociadas a una polarización política interna. La economía de Bolivia también ha sido afectada por la desaceleración regional y por disturbios sociales

³ "Países andinos" se refiere a los países que son actualmente miembros de la CAN (Comunidad Andina de Naciones).

internos. Sin embargo, durante los años noventa el país incrementó su tasa de crecimiento económico.

Este trabajo ofrece un marco analítico para entender las condiciones de gobernabilidad en el área andina. El enfoque propuesto se centra en 3 conjuntos de variables: i) las principales características y la frecuencia de cambio de los regímenes políticos y constitucionales, ii) la calidad de las instituciones y iii) la desigualdad social y diversidad étnica, como elementos determinantes de las condiciones de gobernabilidad de los países Andinos. Este es un estudio exploratorio, conceptual y empírico, de un tema muy complejo. El trabajo se organiza en 4 secciones además de esta introducción. En la sección II se desarrolla un marco conceptual que distingue el rol de los regímenes políticos (presidencialismo-parlamentarismo, democracia-autoritarismo), las reglas constitucionales, la calidad de las instituciones y los patrones de conflicto social en la gobernabilidad. El análisis empírico del documento (sección III) combina evidencia histórica y reciente sobre la frecuencia de las reformas constitucionales, las crisis presidenciales y los regímenes políticos con índices subjetivos recientes de calidad institucional y gobernabilidad publicados por varias instituciones. En la misma sección se presentan indicadores de desigualdad social, diversidad étnica y desempeño económico para cada uno de los países andinos. La sección IV da una interpretación de los principales rasgos de gobernabilidad en la región andina y la sección V concluye.

II. REGÍMENES POLÍTICOS, INSTITUCIONES Y CONFLICTO SOCIAL: UN MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual propuesto identifica tres grupos de variables como los principales determinantes de las condiciones de gobernabilidad:

- La naturaleza y estabilidad del régimen político y de la Constitución.
- La calidad de las instituciones.
- Los patrones de conflicto social y de cooperación en la sociedad, que están relacionados con la desigualdad y la diversidad étnica.

El régimen político y las reglas constitucionales pertenecen al más alto rango en la jerarquía institucional⁴ de un país. Los organismos judiciales, los entes reguladores, los ministerios, el proceso presupuestal, son instituciones que estarían en un siguiente lugar en la jerarquía institucional de una nación. La constitución fija las reglas del juego más importantes en las que se desenvuelven las instituciones. Como nuestro interés es entender por qué se producen problemas y crisis de gobernabilidad, en este documento se identifican las relaciones entre agente y principal, las actividades de captura de rentas (*rent-seeking*), la corrupción y la violencia como factores que debilitan las instituciones y el régimen político. El tercer grupo de variables de nuestro marco conceptual va más allá de las instituciones formales y se enfoca en patrones de conflicto (y cooperación) social que afectan y son afectados por el marco institucional. Aquí se pone el énfasis en que el conflicto social está directamente relacionado con la inequidad de la distribución del ingreso y la riqueza y, en los países que es relevante, con la diversidad étnica. Este marco conceptual resalta el impacto (y los efectos de interacción) de cada uno de estos tres grupos de variables sobre la gobernabilidad.

A continuación analizaremos las principales bases conceptuales de estas tres categorías de variables.

⁴ Ver Tommasi (2002) para una discusión sobre el concepto de "jerarquía institucional".

A. Regímenes políticos y constituciones

La teoría de las Constituciones tiene una larga historia proveniente de Montesquieu (1748), Hamilton y los "padres fundadores" de la Constitución de Estados Unidos, Hayek (1960), Buchanan y Tullock (1962). Recientes contribuciones en el análisis constitucional, desde una óptica de economía política, son Cooter (2000) y Aghion, Alesina y Trebbi (2002).

La Escuela de elección Pública (*public choice school*) o enfoque contractual (*contractarian approach*) (Buchanan y Tullock, 1962 y Buchanan, 1988) asociada principalmente con el premio Nóbel de economía James Buchanan, se enfoca en el estudio de los contratos sociales que definen el marco político en el que se desarrolla una sociedad. La Constitución de un país es el contrato social (formal) más importante. Buchanan (1988) distingue entre escribir una Constitución, es decir, plantear las reglas de juego básicas de una sociedad y el proceso específico de hacer las políticas (*policy making*) bajo las reglas generales establecidas en la Constitución. En el lenguaje de la teoría de juegos se podría decir que en una primera etapa, la Constitución establece las reglas del juego y en la segunda etapa se empieza a jugar este, desarrollando las políticas y acciones gubernamentales específicas. El análisis normativo de economía política se concentra en la primera etapa (escribir la Constitución y establecer las instituciones básicas de la sociedad). El análisis positivo se enfoca en la segunda etapa, analizando como se "juega el juego"⁵.

⁵ Dixit (1996) insiste que, en la práctica, la distinción entre hacer las reglas y ejecutar es más un continuum que una escogencia discreta de categoría binaria. Políticas específicas pueden tener efectos permanentes en el largo plazo comparables con el impacto de las decisiones en el proceso de hacer las reglas.

En condiciones ideales, las Constituciones se escriben "bajo el velo de la ignorancia" es decir, quienes las escriben no conocen su situación relativa de recursos en la sociedad y por ende desconocen el efecto que tendrán las reglas constitucionales sobre ellos en el futuro. Este supuesto garantiza que la constitución capture el "bien común" (ya sea por altruismo de los constituyentes o porque estos no saben su suerte futura en la sociedad y por ende diseñan una constitución que no los perjudique al revelarse su posición efectiva en la sociedad (estrategia de minimización de riesgos) (Dixit, 1999a).

La Constitución es el documento legal más importante que establece los derechos básicos y las responsabilidades de los individuos en el funcionamiento del sistema político. En las democracias se hace una distinción importante entre el *sistema parlamentario* y el *sistema presidencial* con los regímenes semipresidenciales (e.g. Francia) ubicados entre ambos. En sistemas presidenciales los presidentes son elegidos por votación directa o por un colegio electoral, tienen períodos presidenciales fijos y la presidencia usualmente está dotada de poderes considerables para presentar legislación al Congreso además de administrar la rama ejecutiva del gobierno. Los presidentes no pueden terminar su mandato antes que expire su período constitucional, excepto por destitución o renuncia. Los regímenes presidenciales no requieren de mayoría legislativa. En contraste, en regímenes parlamentarios los jefes de gobierno o primer-ministro son elegidos por el parlamento y pueden salir de su cargo después de un voto de no-confianza en caso de una crisis política. En definitiva el jefe de gobierno necesita una mayoría parlamentaria para sostener su gobierno.

Un criterio importante para comparar regímenes presidenciales con regímenes parlamentarios es su contribución a la continuidad y a la estabilidad de

la democracia, evitando crisis políticas, así como la capacidad de cada sistema para evitar "rupturas de régimen" en el evento de una crisis política grave. Autores como Juan Linz y Arturo Valenzuela (1994) argumentan que la "legitimidad dual" entre la presidencia y el parlamento, la excesiva concentración del poder en el presidente en un régimen presidencial ("el ganador toma todo"), y la rigidez del mandato, hacen que los regímenes presidenciales sean más propensos a generar crisis políticas que las democracias parlamentarias⁶. Desde el punto de vista económico, la elección del régimen político y su estabilidad en el tiempo, afecta el grado de estabilidad política del país y por esa vía la inversión y la tasa de crecimiento económico.

B. Instituciones: calidad, fortalezas y debilidades

Una vez definido el sistema político (formal) de un país por su Constitución, se generan diversas instituciones cuya calidad es crucial para asegurar una adecuada gobernabilidad. La Economía Política Positiva (EPP) aplica principios económicos de individualismo, incentivos y racionalidad al análisis de las instituciones y de su impacto en el desempeño económico (North, 1990). En este enfoque las instituciones se crean para reducir los costos de transacción tanto en el campo económico como en el campo político⁷.

La teoría de *política de los costos de transacción* (PCT) desarrollada por Douglas North (1990b) y Avinash Dixit, (1996, 2001a, 2001b) ha recibido atención considerable en años recientes. Este enfoque de economía política evalúa el impacto de las estructuras políticas de gobierno (Constituciones,

⁶ Ver Linz y Valenzuela (1994) y Mainwaring y Shungart (1997) que exponen puntos de vista alternativos en presidencialismo y parlamentarismo.

leyes, agencias del gobierno) sobre los "costos de transacción". En analogía con la teoría *económica de los costos de transacción*, la teoría *política de los costos de transacción* toma los contratos como unidad de análisis. Sin embargo, mientras que en economía un contrato (e.g. rentar una casa o prestar dinero a una firma) es generalmente un proceso verificable, en política los contratos son más complejos. La definición de un "contrato político" es frecuentemente difusa: un presidente o senador puede ser elegido con una plataforma que es vaga, poco verificable, lo que hace difícil el monitoreo del cumplimiento de las promesas iniciales de los políticos o los gobiernos. Además, existen incentivos para cambiar las políticas en el camino y alterar los compromisos existentes (e.g. el fenómeno conocido como "inconsistencia inter-temporal de las políticas") (Drazen, 2001). Estos problemas de agente-principal se complican más al tener en cuenta la existencia de varios principales (el electorado, los votantes, los grupos de interés específicos). La diversidad de principales permite que los agentes (gobierno, parlamento, agencias públicas) intenten cumplir varios mandatos que usualmente son inconsistentes entre sí. La verificación de los "contratos políticos" es difícil pues los mecanismos de verificación (elecciones, referendos) no pueden ser acti-

⁷ Una visión alternativa del origen de las instituciones la propone Olsen (2000) quien propone una teoría de poder y conformidad obligatoria para explicar el origen del estado y las instituciones. En el enfoque de Olsen, las instituciones no son necesariamente creadas por razones de eficiencia para reducir los costos de transacción sino por propósitos de redistribución de recursos hacia aquellos que están en el poder. En esta corriente las instituciones pueden ser disfuncionales y consistentes con el deterioro económico. Teorías recientes de los orígenes de las instituciones (Acemoglu, 2002) argumentan que instituciones (y políticas) ineficientes pueden ser funcionales a los intereses de ciertos grupos sociales y políticos y negativas para la sociedad en general. En este enfoque, al igual que en Olsen, las instituciones no son creadas para reducir costos de transacción sino para consolidar el poder de ciertos grupos o individuos.

vados cada vez que se observa una desviación del acuerdo inicial. En reconocimiento de estas dificultades, las teorías de economía política moderna han concebido nuevos conceptos como reputación, compromiso, reglas y delegación. Esta literatura busca diseñar ciertos mecanismos institucionales (i.e. bancos centrales independientes) que reduzcan la tentación de los agentes a no cumplir con sus mandatos (i.e. asegurando que un gobierno cumpla su promesa de no generar inflación). Los incentivos a no cumplir se deben a problemas de inconsistencia dinámica, mandatos en conflicto y ausencia de sistemas de rendición de cuentas (accountability). Por estas razones, se hace importante contar con las instituciones adecuadas que articulen una relación funcional entre principal y agente para el cumplimiento de los mandatos públicos.

1. *Captura de rentas, corrupción y violencia como factores que debilitan las instituciones.*

Bajo condiciones ideales las instituciones y organizaciones deben tener claridad en sus metas, estar financiadas apropiadamente, contar con adecuados recursos humanos y estar libres de interferencia política indebida. En la sección anterior identificamos varias causas de las fallas institucionales relacionadas con el problema de principal-agente que es particularmente serio en el caso de las "transacciones políticas". Aquí identificamos tres fenómenos concretos y de alta relevancia empírica en muchas sociedades que debilitan las instituciones y el estado. Cuando estos problemas se hacen muy agudos pueden llevar incluso al colapso del estado.

Captura de rentas. El enfoque de *captura de rentas* (*Rent-seeking approach*) (Krueger, 1974), en economía política, ve a la sociedad formada por individuos organizados en grupos de interés motivados

por su interés particular y no por el interés general. Podemos dar varios ejemplos: los agricultores que buscan esquemas de protección de precios, los industriales que esperan protección ante la competencia externa, los banqueros que presionan por una regulación que impida la entrada de nuevos intermediarios financieros, etc. En este enfoque el Estado se visualiza como una "maquinaria institucional" que administra favores y transfiere ingresos entre grupos e individuos a cambio de apoyo político.

La búsqueda de rentas lleva a algunos grupos a intentar *capturar* instituciones claves del Estado como aduanas, servicios tributarios, agencias que controlan la inversión pública, empresas del estado y otras.

Corrupción. Estas rentas se puede obtener por la apropiación ilegal de activos públicos para beneficio personal. En este caso nos referimos a *corrupción*. En un caso límite los grupos de presión pueden intentar tomarse todo el aparato estatal y la corrupción se convierte en un resultado de la captura del Estado por parte de los grupos predatorios. La corrupción y el robo de activos del Estado tienden a florecer en estados débiles en donde el cumplimiento de las leyes es restringido y los mecanismos de rendición de cuentas (contralorías, parlamento, tribunales de justicia, un público informado) son muy débiles.

Violencia. En un mundo ideal de intercambio voluntario y cumplimiento absoluto de la ley no hay violencia. Sin embargo, un rasgo importante de varias sociedades contemporáneas⁸ es la existencia de la violencia y conflicto interno, que en algunos casos han debilitado severamente al Estado y lo

⁸ Actualmente alrededor de 40 países, incluyendo Colombia, experimentan algún tipo de conflicto interno, guerra civil, o rebeliones significativas en sus propios territorios.

han llevado a su eventual colapso. En estos casos, el Estado deja de tener el monopolio del uso de la fuerza y del cumplimiento de las leyes. Hay un creciente interés en la literatura sobre conflictos armados por entender mejor la motivación de los grupos rebeldes. Esta puede ser una mezcla de motivos políticos (rebelión como búsqueda de justicia) y motivos casicriminales (rebelión como crimen)⁹. La visión de rebelión como una actividad orientada a obtener ingresos y riquezas enfatiza los rasgos casi-criminales de las organizaciones rebeldes que comparten varias de las motivaciones de organizaciones criminales aunque no son exactamente iguales a estas¹⁰. La escala del conflicto armado y de la rebelión es mucho más grande que la del crimen, incluyendo el crimen organizado¹¹.

En los enfoques que visualizan la rebelión como "búsqueda de justicia" se enfatiza los "factores de protesta" (grievance factors) como desigualdad en la distribución del ingreso, fraccionamiento étnico y religioso y motivaciones políticas como los estímulos más importantes de los grupos involucrados en el conflicto interno.

⁹ Collier y Hoeffler, (2001), usando datos de 78 grandes conflictos civiles entre 1960 y 1999 encontraron evidencia económica de que el riesgo (probabilidad) de que una guerra civil comience durante un período de 5 años es mejor explicado por un grupo de determinantes conocidos como factores de ambición de riqueza que por factores de protesta.

¹⁰ En general los determinantes del crimen no son los mismos determinantes de la rebelión y las guerras civiles aunque el crimen y la rebelión frecuentemente se traslapan en formas complejas.

¹¹ Empíricamente la literatura identifica las guerras civiles como conflictos que involucran por los menos 1.000 muertes en batalla por año. Las muertes toman lugar en un contexto de violencia entre el gobierno y un grupo organizado e identificable; más aún, por lo menos 5% de las muertes deben asociarse a uno de los bandos. En cambio, las organizaciones criminales, pandillas y mafias, usualmente se componen de 20 a 500 miembros y las organizaciones rebeldes tienen de 500 a 5.000 o más combatientes.

La acción de los grupos rebeldes, ya sea con motivaciones políticas o con motivaciones criminales se orienta a *debilitar* y eventualmente *destruir* el Estado. De esta manera estos grupos pueden perseguir más fácilmente sus actividades predatorias. Es interesante anotar que en muchos casos las organizaciones rebeldes no buscan la victoria total sobre el gobierno (i.e. digamos la toma del poder). A veces están interesados en preservar un Estado débil y beneficiarse de tal situación. En estas condiciones, el conflicto armado se convierte en un fenómeno "de equilibrio" en el sentido de volverse estable, y se perpetúa (ver Collier, 2000)¹². Es interesante cómo estas predicciones encajan perfectamente con la larga duración (cuatro décadas) del conflicto interno de Colombia.

C. Conflicto social y cooperación: desigualdad y fragmentación étnica

Además de las instituciones formales identificamos el conflicto social(o la cooperación social) como un determinante muy importante de las condiciones de gobernabilidad. Los individuos, grupos y clases sociales tienen diferentes intereses económicos e ideológicas. Muy raramente dichos intereses armonizan perfectamente. Toda sociedad es un espacio en el que coexisten el conflicto y la coopera-

¹² Los movimientos rebeldes pueden obtener diferentes recursos financieros por distintas vías: i) actividades criminales como secuestro, extorsión y petición de rescate para financiar sus actividades, acompañadas de alianzas o impuestos a organizaciones criminales (e.g. es sabido que los grupos guerrilleros en Colombia reciben una importante cantidad de sus ingresos a través de impuestos que le cobran a los carteles de droga), ii) depredación de recursos naturales que ellos controlan, iii) fondos que provienen de gobiernos extranjeros hostiles al adversario de los grupos rebeldes, iv) fondos de diásporas (usualmente viviendo en países desarrollados) formados por nacionales que abandonaron su país natal por las guerras civiles o extensión del conflicto y envían contribuciones financieras para apoyar los grupos rebeldes con los que se identifican por razones históricas.

ción. El sistema político desempeña el rol de mediador de diferentes demandas y conflictos provenientes de distintos grupos sociales¹³. El conflicto social puede ser de diferente naturaleza. Uno es de tipo distributivo en el que los grupos (o clases económicas) buscan preservar o incrementar su participación en el ingreso nacional (Taylor, 1991). Desde ese punto de vista, la inflación puede verse como un resultado del conflicto distributivo sobre el ingreso real en el que cada grupo maneja un precio (salarios, mark-ups, etc.) que al combinarse con una política monetaria acomodaticia genera inflación. Otra área de conflicto distributivo se relaciona con los impuestos, las transferencias y el gasto público. Los grupos de bajos ingresos suelen presionar por tasas más altas de tributación para financiar gasto social y transferencias de ingreso. En contraste, las clases media-alta y alta tienden a favorecer un menor nivel de impuestos. En la práctica el conflicto y la cooperación se alternan; así los niveles de impuestos y gasto público reflejan el efecto de distintas presiones. Sin embargo en una democracia, se requiere de un consenso en el parlamento para aprobar las leyes que definen los niveles de impuestos y gastos. De esta forma conflicto y cooperación se suceden y entrelazan.

El conflicto social y la desigualdad tienen no sólo un impacto sobre la gobernabilidad sino también sobre la economía. La teoría de crecimiento endógeno investiga el rol de la desigualdad en el crecimiento económico y predice que sociedades menos igualitarias tienden a generar mayor polarización social y conflicto político que sociedades más igualitarias. De esta manera, el crecimiento econó-

mico, controlando por niveles de desarrollo, será más alto en sociedades menos desiguales que en sociedades más desiguales y polarizadas. En estas últimas hay una mayor presión por niveles más altos de tributación, hay más conflictos sociales que en sociedades más igualitarias. El conflicto social, sobre todo a niveles agudos y persistentes, afecta negativamente la formación de capital y el crecimiento (Solimano, 1998).

Otra dimensión de la diferenciación social, que puede llevar al conflicto social, es la diversidad étnica. En el área Andina, esta es muy importante en Bolivia, Perú y Ecuador, no así en Colombia y Venezuela (Handa and Glassman, 2004). La pregunta que surge es si las sociedades multi-étnicas tienen más dificultades para alcanzar consensos (es decir son más conflictivas) y crecen más lento que las sociedades étnicamente homogéneas. Estudios empíricos del impacto del fraccionamiento etno-lingüístico en el crecimiento económico dan diferentes respuestas a esta pregunta. Por una parte, autores como Easterly y Levine (1997) otorgan un rol central al fraccionamiento etno-lingüístico para explicar el pobre ritmo de crecimiento de la África multi-étnica. En contraste, Collier (2001) encuentra que sociedades étnicamente diferenciadas no necesariamente tienen un peor desempeño económico que sociedades étnicamente más homogéneas. Para Collier el régimen político y el grado de dominación étnica son más importantes que la simple diferenciación étnica para explicar el crecimiento económico en África.

D. Otros factores que afectan la gobernabilidad: rol del líder, ideología, otros

Es importante también mencionar otros factores que inciden en las condiciones de gobernabilidad de un país. Un factor importante, es el tipo y cali-

¹³ La teoría Marxista enfatiza el conflicto social en el desarrollo capitalista. El principal conflicto es entre capital y trabajo. Otras teorías identifican otros actores del conflicto social que van más allá del capital y el trabajo.

dad de liderazgo político. La personalidad, carácter e ideología del líder ya sea el presidente o jefe de gobierno es claramente un factor que afecta la gobernabilidad. El famoso cientista social Max Weber hablaba del "líder carismático" como fuente de legitimación política para el dirigente político. Otras variables son el tipo de sistema legal imperante (anglosajón, napoleónico, etc). También las creencias ideológicas y religiosas de la población, las tradiciones políticas de un país son todas influencias importantes en la gobernabilidad.

III. ANÁLISIS EMPÍRICO

En ésta sección investigamos empíricamente, el impacto de los regímenes políticos y los cambios constitucionales, la calidad de las instituciones y el conflicto social sobre la gobernabilidad y el crecimiento económico de los países andinos. Para esto combinamos datos históricos con indicadores subjetivos de calidad de instituciones.

A. Frecuencia de reformas institucionales, crisis presidencial y regímenes políticos.

Empezamos nuestro análisis empírico de gobernabilidad en los Países Andinos (*PA*) mirando primero la estabilidad del marco constitucional. Si bien el contenido de las constituciones es muy importante y lo tocaremos al momento de examinar el régimen político, la frecuencia de cambios constitucionales afecta la estabilidad de las reglas del juego político-institucional. Para esto hemos investigado la frecuencia de modificaciones constitucionales que han llevado a la aprobación de nuevas Constituciones en cada *PA* durante el siglo XX (ver Cuadro 1). El país andino que ha experimentado el número más alto de nuevas constituciones entre 1900 y 2000 es Venezuela con 8 constituciones aprobadas en el siglo XX (seis de las ocho constituciones fueron aproba-

das entre 1903 y 1953). Le sigue Ecuador con 7 constituciones (3 aprobadas desde 1967); Bolivia (5 constituciones), Perú (4 constituciones) y Colombia (sólo una nueva constitución aprobada en 1991). El Cuadro 2 muestra el número de nuevas constituciones en el siglo XX en tres países que usualmente son considerados como los más estables políticamente de Latinoamérica: Costa Rica, Chile y Uruguay. Un cálculo similar se hace para cuatro países de la *OECD*: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Cabe notar que todos los países latinoamericanos analizados, así como los *EEUU* tienen regímenes presidenciales en el mismo período de análisis. En contraste, Alemania, el Reino Unido e Italia tienen regímenes parlamentarios.

Para los cinco países andinos, el número promedio de nuevas constituciones en el siglo XX es 5, ciertamente un número alto cuando se considera desde una perspectiva internacional. En el mismo período, el número promedio de nuevas constituciones para Costa Rica, Chile y Uruguay fue 2,5¹⁴. En cambio, el número promedio de reformas constitucionales en los *EEUU*, Reino Unido, Italia y Alemania fue 0,8 (en el siglo XX). Ni los Estados Unidos ni el Reino Unido han aprobado nuevas constituciones en el último siglo. En cambio, Alemania aprobó una nueva constitución en 1919 y otra en 1949, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente.

Otra medida de inestabilidad política es la frecuencia de las crisis presidenciales. Por crisis presidencial nos referimos al caso en que el jefe de Estado (el presidente) no completa su período presidencial por destitución forzosa, golpe de estado, renuncia,

¹⁴ Uruguay tiene el número más alto de reformas constitucionales de los tres países más "estables" en Latinoamérica.

Cuadro 1. CRISIS CONSTITUCIONALES, PRESIDENCIALES Y REGIMENES POLÍTICOS, PAÍSES ANDINOS

Países	Número de constituciones ^a 1900-2000		Crisis presidencial ^b 1950-2002		Número de crisis presidenciales en el período	Régimen político prevaliente antes de la crisis presidencial
	Año	número de reformas constitucionales en el siglo XX	Año de crisis y presidente	Período presidencial hasta la crisis		
Bolivia	1938		1951 (Mamerto Urriolagoitia)	1949-1951		Democracia
	1945		1952 (General Hugo Ballivián)	1951-1952		Autoritario, militar
	1960		1964 (Víctor Paz)	1960-1964		Democracia
	1967		1969 (General René Barrientos) ^d	1966-1969		Autoritario, militar
	1994		1969 (Luis Siles)	1969		Autoritario, militar
			1970 (General Alfredo Ovando)	1969-1970		Autoritario, militar
			1971 (General Juan José Torres)	1970-1971		Autoritario, militar
			1978 (General Juan Pereda)	1978	17	Autoritario, militar
		5	1979 (General Alberto Natusch)	1979		Democracia
			1979 (Walter Guevara)	1979		Autoritario, militar
			1980 (Lidia Gueillier)	1979-1980		Democracia
			1981 (General Luis García)	1908-1981		Autoritario, militar
			1982 (General Celso Torrelio)	1981-1982		Autoritario, militar
			1982 (General Guido Vildoso)	1982		Autoritario, militar
			1985 (Hernán Siles)	1982-1985		Democracia
			2001 (Hugo Banzer) ^e	1997-2002		Democracia
			2003 (Gonzalo Sánchez de Losada)	2002-2003		Democracia
Colombia	1991	1	1953 (Laureano Gómez)		2	Democracia
			1957 (Gustavo Rojas)	1953-1958		Autoritario, militar
Ecuador	1929		1961 (José María Velasco)	1960-1961		Democracia
	1938		1963 (Carlos Arosemena)	1961-1963		Democracia
	1945		1970 (José María Velasco) ^a	1968-1970		Democracia
	1946		1972 (José María Velasco)	1970-1972		Autoritario, militar
	1967		1976 (Gral. Guillermo Rodríguez)	1972-1976		Autoritario, militar
	1979	7	1981 (Jaime Roldás) ^e	1979-1981	10	Democracia
	1998		1997 (Abdalá Bucaram)	1996-1997		Democracia
			1997 (Rosalía Arteaga)	1997		Democracia
			2000 (Jamil Mahuad)	1998-2000		Democracia
			2000 (Solórzano, Mendoza, Vargas)	2000		Democracia
Perú	1920		1963 (Ricardo Pérez)	1956-1962		Democracia
	1933		1962 (Manuel Prado)	1962		Autoritario, militar
	1979		1968 (Fernando Belaude)	1963-1968		Democracia
	1993	4	1975 (Juan Velasco) 1968-1975	1968-1975	6	Autoritario, militar
			1992 (Alberto Fujimori) ^e	1990-1992		Democracia
			2001 (Alberto Fujimori)	1995-2000		Democracia
Venezuela	1901		1950 (Carlos Delgado) ^d	1948-1950		Autoritario, militar
	1909		1958 (Marcos Pérez)	1952-1958		Autoritario, militar
	1931		1993 (Carlos Andrés Pérez)	1989-1993		Democracia
	1945		2002 (Hugo Chavez) ^f	1999	4	Democracia
	1947	8				
	1953					
	1961					
	1999					

^a Nueva constitución aprobada; ^b Presidentes que no completaron su período constitucional por golpes, destitución o retiro no-voluntario; ^c Por enfermedad del presidente; ^d Muerte del presidente; ^e Auto - golpe; ^f Golpe fallido.

Fuente: <http://geocities.yahoo.com.br>, <http://es.geocities.com>, <http://www.explored.com.ec>, <http://www.tierra-inca.com>, <http://www.aldeeducativa.com>

Cuadro 2. REFORMAS CONSTITUCIONALES, CRISIS PRESIDENCIALES Y CAMBIOS DE PRIMER MINISTRO (Países seleccionados)

Países/año	Número de constituciones ^a 1900-2000	Crisis presidencial ^b 1950-2002			Regimen político prevaliente antes de la crisis presidencial
	Número de reformas constitucionales en el siglo XX	Año de crisis y presidente	Periodo presidencial hasta la crisis	número de crisis presidenciales en el periodo	
Chile					
1925	2	1973 (Salvador Allende)	1970-1973	1	Democracia
1980					
Costa Rica					
1949	1			0	
Uruguay					
1918		1976 (Juan M. Bordaberry)	1972-1976		Democracia
1934		1976 (Alberto Demichelli)	1976		Autoritario civil
1942	5			2	
1952					
1967					
USA	0	1963 (John F. Kennedy)	1961-1963	2	Democracia
		1974 (Richard Nixon)	1969-1974		Democracia
Regímenes parlamentarios				Cambio 1er ministro	
Alemania					
1919	2			5	Democracia
1949					
Italia					
1948	1			58	Democracia
Reino Unido	0			12	Democracia

^a Nueva constitución aprobada.

^b Presidentes que no contemplaron su período constitucional por golpes, destitución o por retiro no voluntario.

Fuente: <http://icarito.tercera.cl>; www.observa.com; www.guiascostarica.com; www.inter-naciones.de; www.fmmeduccion.com; www.bbc.co.uk; <http://es.geocities.com>

etc. El cuadro 1 provee el número de esas crisis presidenciales en los cinco países andinos en el período 1950-2002.

El país con mayor número de crisis presidenciales es Bolivia con 17 de ellas entre 1950 y 2002. La mayoría de estas crisis (11) tuvieron lugar en el período entre 1969-1982. Claramente los años setenta (y años adjuntos) fueron de alta inestabilidad política para Bolivia¹⁵. Otro país con una alta frecuencia de crisis presidenciales es Ecuador con 10 de ellas, mayormente concentradas en los años setenta y no-

venta. En contraste, Colombia registra sólo dos crisis presidenciales en la última mitad de siglo, ambas en los años cincuenta. Resulta interesante que Colombia a pesar de su conflicto armado, despliega un grado importante de continuidad democrática (baja frecuencia de crisis presidenciales, ver Ocampo, 2004).

¹⁵ Para un análisis de economía política del caso Boliviano, ver Gray-Molina and Chavez (2004), ver también para el grupo andino, Solimano (2004).

La última columna del Cuadro 1 muestra el régimen político (democrático o autoritario) que prevalecía al momento de las crisis presidenciales en cada uno de los países andinos. Aparentemente, no hay una correlación clara entre la naturaleza del régimen político y la frecuencia de las crisis presidenciales aunque la relación entre las dos variables varía entre países. Es más, en Bolivia la mayoría de las crisis presidenciales tuvieron lugar dentro de regímenes militares, no elegidos democráticamente. Esta es la historia de generales que se convierten, por un golpe de estado, en presidentes reemplazando a otros generales que a su vez se convirtieron antes en presidentes por otro golpe. En contraste, Ecuador, el país con la segunda frecuencia más alta de crisis presidenciales tuvo varias de ellas en regímenes democráticos, especialmente en los años noventa (i.e. Abdalah Bucaram y Jamil Mahuad fueron dos presidentes elegidos democráticamente y destituidos, por diferentes razones, antes de que terminaran sus mandatos). Es interesante notar que las crisis presidenciales ocurren tanto bajo regímenes democráticos como bajo regímenes autoritarios. El autoritarismo no es garantía de estabilidad política. La hipótesis de Linz y Valenzuela (1994) es que los regímenes presidenciales son más propensos a generar crisis políticas y de régimen que los sistemas parlamentarios.

Un caso interesante de una alta rotación de Primeros Ministros (un concepto diferente al de crisis presidencial) en un régimen parlamentario es Italia país que ha tenido 58 primeros ministros en los últimos 52 años (en promedio más de un primer ministro por año). El caso italiano muestra un sorprendente resultado según el cual en un régimen parlamentario se puede dar una altísima frecuencia de cambio de los primeros ministros sin que ocurran crisis constitucionales y/o crisis económicas generadas por inestabilidad política.

Volviendo a la región andina, el grado de continuidad de la democracia (ausencia de crisis constitucionales) en los últimos cuarenta años ha sido mucho más alto en Colombia y Venezuela que en Perú, Bolivia y Ecuador¹⁶. Es un hecho que mientras estos países tuvieron varias intervenciones militares en los años sesenta y setenta, Colombia y Venezuela se las han arreglado para evitar tener regímenes militares desde los años cincuenta. Esto no quiere decir que estos dos países hayan tenido estabilidad política completa en esos años. Es más, Venezuela tuvo una crisis presidencial con Carlos Andrés Pérez en 1993 y un intento de golpe de estado en contra de Chávez en 2002 y en la actualidad vive un conflicto político interno bastante agudo entre gobierno y oposición; sin embargo, esta turbulencia no ha llevado a un colapso de la democracia (al menos hasta ahora)¹⁷.

B. Indicadores subjetivos de calidad de las instituciones y gobernabilidad: los Índices del Banco Mundial

Examinemos ahora índices de calidad institucional de tipo subjetivo, es decir que se basan en encuestas a usuarios de instituciones. Considerando un grupo de más de 150 países, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton (1999, 2002) del Banco Mundial proporcionan seis indicadores de gobernabilidad para cada uno de los países andinos en dos años: 1998 y 2001. El Cuadro 3 provee la ubicación en el ranking según esos índices para los países andinos, Costa Rica, Chile y Uruguay, el promedio para Latino-

¹⁶ Para un análisis del caso de Ecuador, ver Arteta y Hurtado, (2004). El caso de Perú es estudiado en Jaramillo y Saavedra (2004).

¹⁷ Ver Hartlyn (1994) y Coppedge (1994) para análisis del presidencialismo en Venezuela. Un análisis más reciente para Venezuela es de Bufalo y Rios (2004).

Cuadro 3. CLASIFICACIÓN DE GOBERNABILIDAD PARA LOS PAÍSES DEL GRUPO ANDINO

Países	Voz y rendición de cuentas		Inestab. política y violencia		Efectividad gubernamental		Calidad en la regulación		Control de las leyes		Control de la corrupción	
	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001
Número de países	170	173	152	161	153	159	163	168	167	169	152	160
Bolivia	63	67	87	122	83	101	22	39	97	100	95	119
Colombia	91	112	140	149	74	95	69	93	128	132	102	89
Ecuador	66	92	108	131	110	129	61	95	121	130	123	140
Perú	124	70	111	95	54	93	37	61	110	109	73	72
Venezuela	68	106	92	100	131	124	91	115	117	136	114	107
Países andinos	82	89	108	119	90	108	56	81	115	121	101	105
Top Latinoamérica												
Chile	54	52	51	30	23	23	18	13	24	24	25	17
Costa Rica	21	16	30	24	42	37	16	26	48	50	37	32
Uruguay	46	32	58	25	37	44	13	22	61	48	45	37
Latinoamérica	83	81	83	91	92	83	79	61	105	101	91	89
OECD	24	23	28	26	24	25	28	29	27	27	25	23

Fuente: Kaufmann D., Kraay A., and Zoido-Lobaton P. (1999-2002). "Governance Matters", Policy Research Working Paper 2196 and "Governance Matters", Policy Research Working Paper 2772.

américa y los países *OECD*. Estos indicadores de gobernabilidad se basan, como se indicó, en los resultados de encuestas cualitativas aplicadas a ciudadanos, inversionistas y usuarios de servicios públicos que comprenden las siguientes dimensiones¹⁸:

- Voz y rendición de cuentas
- Inestabilidad política y violencia
- Efectividad gubernamental
- Calidad en la regulación
- Cumplimiento de las leyes
- Control de corrupción

Estas variables reflejan varios aspectos de lo que se puede considerar como "buen gobierno"¹⁹. Por ejemplo la dimensión *voz y rendición de cuentas* es im-

portante para permitir la operación de mecanismos de retroalimentación entre usuarios y proveedores de servicios públicos, o entre principales (votantes) y agentes (gobierno, políticos) con relación al cumplimiento de los mandatos públicos. En cambio, la existencia de *inestabilidad política y violencia* es indicativa de problemas de gobernabilidad además de estar correlacionada con un pobre desempeño económico²⁰. Las otras variables de la lista también son identificadas por la literatura como indicadores de calidad gubernamental y estabilidad en las instituciones.

¹⁸ Estudios sobre la relación entre la calidad institucional y el desempeño del crecimiento son Barro (1996), Mauro (1995), Snack y Keefer (1995). Un resumen útil de esta literatura se encuentra en Aron (2000).

¹⁹ Ver La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer y Vishny (1998) para una discusión interesante sobre "calidad gubernamental" y sus determinantes.

²⁰ Ver Servén y Solimano, (1993) y Pyndick y Solimano (1993) para una discusión analítica con evidencia empírica de los efectos adversos de la inestabilidad económica en la formación de capital privado, un determinante importante de la tasa de crecimiento económico. Estudios de los efectos de la inestabilidad política en el crecimiento son Alesina y Rodrick (1994), Barro (1991), Alesina *et. al.* (1996).

La importancia de las variables institucionales se refleja en una creciente literatura que encuentra una correlación positiva entre desempeño económico y calidad gubernamental e instituciones (ver Mauro (1995), Knaack y Keefer (1995), Barro, (1996) y otros).

El Cuadro 3 muestra que el grupo andino como un todo clasifica en un nivel más bajo en los ranking internacionales (es decir, con menor calidad institucional, según estos índices) que el promedio de Latinoamérica y la región Caribe en las diferentes medidas de gobernabilidad. Esto es así con el índice de voz y rendición de cuentas, en el grado de inestabilidad política y violencia, en la efectividad gubernamental, en el cumplimiento de las leyes y en el control de corrupción. Sus clasificaciones son menores cuando se compara también con Chile, Costa Rica, y Uruguay y los países de la *OECD*. Entre los países andinos también existen diferencias entre los distintos índices. Por ejemplo, en términos de regulación Bolivia aparece más cerca a los niveles de los países de la *OECD* que los otros países Andinos, según este índice. Sin embargo, hay algunos cambios en la clasificación entre 1998 y 2001. El indicador de voz y rendición de cuentas empeoró en Colombia, Ecuador y Venezuela entre 1998 y 2001 y mejoró en Perú (probablemente asociado con mejores mecanismos de rendición de cuentas después de la renuncia del presidente Fujimori). La inestabilidad política y la violencia se incrementó en Bolivia, Colombia y Venezuela pero mejoró en Perú (entre 1997 y 2001). En cambio, el control de la corrupción mejoró en Colombia, Perú y Venezuela en el 2001 comparado con 1998.

1. Índices del Foro Económico Mundial- Universidad de Harvard

Otro grupo de indicadores de gobernabilidad que incluye los cinco países andinos es el *Informe de*

Competitividad Global preparado conjuntamente por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Harvard. Este informe calcula un "Índice de Competitividad en el Crecimiento" para 75 países incluyendo naciones desarrolladas, economías en transición y países en desarrollo. Este índice evalúa el potencial de crecimiento económico sostenido de mediano plazo, para un país dado, como una función de tres grupos de subíndices: i) índice tecnológico, ii) índice de calidad de las instituciones públicas, e iii) índice de ambiente macroeconómico.

El índice de competitividad en el crecimiento²¹ para 2001/2002 es calculado para un grupo de 18 "economías centrales (desarrolladas)" incluyendo países con altos niveles de ingreso per cápita y altos niveles de avance en capacidades tecnológicas (medido como el número de patentes por millón de habitantes). También se incluye un grupo de "economías no-centrales" (en desarrollo y transición) con niveles de ingreso per cápita y de desarrollo tecnológico que van de bajo a intermedio. Para el grupo de economías en desarrollo, entre las que se encuentra el grupo andino, el índice se computa dándole ponderaciones iguales (1/3) a los subíndices asociados con la tecnología, la calidad de las instituciones públicas y el ambiente macroeconómico. En el grupo de economías desarrolladas, el subíndice de tecnología tiene una ponderación mayor, 40% frente a 33%, reflejando una contribución más alta de los progresos tecnológicos en el crecimiento del producto en economías con mayor ingreso per cápita.

Para resaltar la importancia de la relación entre crecimiento potencial y calidad de las instituciones, el Cuadro 4 presenta la clasificación del Índice de

²¹ The Global Competitiveness Report, 2001-2002, World Economic Forum. Center for International Development, Harvard University, Chapter 1.

Cuadro 4. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Y GOBERNABILIDAD (Grupo Andino, 2001-2002)

Países	Clasificación índice de competitividad en el crecimiento	Clasificación instituciones públicas	Clasificación subíndice de contratos y leyes	Clasificación subíndice de corrupción
Número de países	75	75	75	75
Perú	55	45	60	30
Venezuela	62	65	71	61
Colombia	65	57	67	40
Bolivia	67	62	62	56
Ecuador	68	68	73	63
Países andinos	63	59	67	50
Top Latinoamérica				
Chile	27	21	26	13
Costa Rica	35	37	35	43
Uruguay	46	31	27	38
Latinoamérica	56	55	57	51
OECD	20	21	21	23

Nota: Índice de Competitividad en el Crecimiento = 1/3 índice tecnológico + 1/3 índice de instituciones públicas + 1/3 índice de ambiente macroeconómico. Índice de Instituciones Públicas = 1/2 subíndice de contratos y leyes + 1/2 subíndice de corrupción. La clasificación es para 75 países.

Fuente: The Global Competitiveness Report 2001-2001, World Economic Forum, Harvard University.

Competitividad en el Crecimiento y el índice de instituciones públicas. Este último índice se compone de: i) subíndice de contratos y leyes y, ii) subíndice de corrupción. El primero mide el puntaje promedio de las preguntas relacionadas con independencia judicial, prácticas gubernamentales, cumplimiento de las leyes y costos relacionados con el crimen organizado. El subíndice de corrupción mide la generalización del soborno en tres áreas claves del servicio público: agencias de importación y exportación, servicios públicos y recolección de impuestos. El Cuadro 4 muestra que, en promedio, para los cinco países andinos, existe una asociación cercana entre su clasificación en el Índice de Competitividad en el Crecimiento (obtienen el lugar 63 en el ranking entre 75 naciones) y su clasificación en el Índice de Instituciones Públicas (obtienen el lugar 59 en el ranking entre 75). Esto sugiere una correlación positiva directa entre el potencial de cre-

cimiento de mediano plazo y la calidad de las instituciones públicas. Así mismo, los países andinos, en promedio, ocupan el lugar 67 en la clasificación del Índice de Contratos y Leyes y el 50 en el Índice de Corrupción. Las diferencias entre los países andinos no son grandes excepto por el Índice de Corrupción en el que Perú aparece como el mejor en la clasificación y Ecuador el peor (en 2001/2002).

Finalmente otra fuente de datos es la actitud de los ciudadanos frente a la democracia. Una medida de las actitudes públicas la provee el "Latino-Barómetro", una encuesta de opinión realizada cada año en varios países Latinoamericanos. El Cuadro 5 muestra que, en promedio, el grado de apoyo público a la democracia ha ido disminuyendo desde 1997, con una mayor disminución en 2001. En ese año, el país del grupo andino con menor apoyo a la democracia fue Colombia (36%), un país golpeado

Cuadro 5. LA DEMOCRACIA ES PREFERIBLE SOBRE OTROS REGÍMENES POLÍTICOS
(% de apoyo público)

Países	1996	1997	1998	2000	2001
Bolivia	64	66	55	62	54
Colombia	60	69	55	50	36
Ecuador	52	41	57	54	40
Perú	63	60	63	64	62
Venezuela	62	64	60	61	57
Grupo andino	60,2	60	58	58,2	49,8
Latinoamérica	60,6	62,8	61,6	59,8	47,4

Fuente: Latinobarómetro.

severamente por la violencia; en cambio, el más alto grado de apoyo a la democracia se concentró en Perú (62%). El grado de apoyo al sistema democrático también ha decaído en los últimos años en Ecuador. Es interesante anotar que la disminución del grado de apoyo a la democracia después de 1997 coincide con el empeoramiento de las condiciones económicas en estos países, asociado con la crisis asiática y otros acontecimientos económicos internos.

C. Desigualdad social y diversidad étnica

Los países andinos tienen una estructura social estratificada caracterizada por alta desigualdad social y gran incidencia de la pobreza. La diversidad étnica es otro elemento importante de la estructura social, como ya hemos dicho más relevante en Bolivia, Ecuador y Perú²². La participación de la población indígena en el total de población en estos países a principios de los años noventa fue 44 por ciento (ver Cuadro 6). En contraste, la participación promedio de población indígena en Colombia y

Venezuela es mucho menor, inferior al 1 por ciento. La diversidad étnica coincide frecuentemente con diferencias lingüísticas y culturales entre los diversos grupos étnicos al interior de un mismo Estado y por tanto tiene importantes implicaciones en la capacidad del sistema político para articular consensos en la sociedad. La habilidad para alcanzar consensos depende de factores como los niveles de participación política de los diferentes grupos, sus derechos, sus organizaciones, la calidad de sus líderes, entre otros.

Volviendo a los indicadores sociales, el Cuadro 7 presenta niveles de pobreza, coeficientes de desigualdad (Gini) y la relación de ingresos entre el quintil más alto y el más bajo de la distribución para ciertos años de la década de los ochenta y noventa. Estos indicadores sociales muestran una incidencia significativa de la pobreza en los países andinos superior al 40 por ciento en años recientes. La incidencia más alta de pobreza se encuentra en Ecuador y Bolivia. Más aún, la pobreza está aumentando en Venezuela un país que en el pasado ha tenido tasas de pobreza relativamente bajas entre los países andinos. El coeficiente de Gini es más alto en Colombia y en Bolivia que en el resto de países y está aumentando en Venezuela (en todo caso

²² Un análisis étnico y de gobernabilidad para Latinoamérica y los países andinos se encuentra en De Gregori (1998).

Cuadro 6. POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS PAÍSES ANDINOS

Países	Año	Población total	Población indígena	Porcentaje
Bolivia	1992	5.183.403	3.058.208	59.0
Colombia	1985	29.719.875	237.759	0.8
Ecuador	1992	11.078.717	3.800.000	34.3
Perú ^a	1992	22.500.000	9.000.000	40.0
Venezuela	1992	34.974.667	314.772	0.9

^a Estimación.

Fuente: Basado en el último censo Celade.

Cuadro 7. POBREZA Y DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES ANDINOS 1990-1997

Países	% hogares por debajo de la línea de pobreza	Coefficiente de Gini	Razón Q5/Q1
Bolivia ^a			
1989	49	0,484	0,062
1994	46	0,435	0,104
1997	47	0,455	0,088
Colombia			
1980	39	0,518	0,058
1991	50	0,403	0,117
1994	47	0,505	0,104
1997	45	0,477	0,088
Ecuador ^a			
1990	56	0,381	0,128
1994	52	0,397	0,108
1997	50	0,388	0,125
Perú			
1979	46	-	-
1986	52	-	-
1990	-	0,438 _a	-
1991	-	0,370 _a	-
1994	-	0,350 _a	-
1995	41	-	-
1997	37	-	-
Venezuela			
1981	22	0,306	0,184
1990	34	0,378	0,127
1994	42	0,387	0,132
1997	42	0,425	0,101
Latinoamérica			
1980	35	-	-
1990	41	-	-
1994	38	-	-
1997	36	-	-

^a Zonas urbanas.

Q5/Q1 = Razón entre el quintil más alto y el más bajo de la distribución.

Fuente: Cepal y Banco Mundial.

se encuentra en niveles altos para todos los países andinos).

D. Desempeño económico

El crecimiento anual promedio de los cinco países andinos en la segunda mitad del siglo XX (1950-2000) fue de 3,9 por ciento anual mientras que el promedio de crecimiento de América Latina fue algo superior (4,2 por ciento, ver Cuadro 8). En la década de los noventa el crecimiento del área andina fue de 2,9 por ciento²³. Los países que presentaron una mayor desaceleración en su tasa de crecimiento fueron Colombia, Ecuador y Venezuela, respecto al promedio de 1950-2000 (Becherman y Solimano, 2002; y Solimano, 2000). Mientras Ecuador creció a una tasa anual de 4,5 por ciento en el período 1950-1990, su crecimiento anual de los años noventa fue de tan sólo 1,9 por ciento anual. Después de la dolarización el crecimiento se recuperó subiendo a 3,1 promedio entre 2000-2003 (Beckerman y Solimano, 2002). Colombia desaceleró su tasa promedio de crecimiento desde 4,3 por ciento en 1950-1990, a 2,9 por ciento en 1990-

²³ Ver Hofman, Solimano y Aravena (2004) para un análisis de largo plazo del crecimiento en el área andina.

Cuadro 8. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAÍSES ANDINOS 1950-2003
(Tasa de variación anual, %)

Países	1950-2000	1950-1990	1990-1995	1995-1999	1990-1999	2000-2003 ^a
Bolivia	2,8	2,5	4,2	3,9	4,0	2,3
Colombia	4,3	4,7	4,5	1,4	2,9	2,2
Ecuador	4,5	5,2	3,4	0,2	1,9	3,1
Perú	3,6	3,5	3,9	3,6	3,3	3,0
Venezuela	4,1	4,6	4,0	0,9	2,4	-2,8
Grupo andino	3,9	4,1	4,0	2,0	2,9	1,5
Latinoamérica	4,2	4,5	2,6	2,5	2,7	1,3

^a 2003 estimaciones preliminares.

Fuente: Cepal.

1999 y 2,2 en 2000-2003²⁴. En contraste, Bolivia aceleró su tasa de crecimiento en los años noventa (a 4 por ciento anual frente 2,8 por ciento en el período 1950-1990)²⁵. Sin embargo en el período 2000-2003 el PIB creció solo a 2,3 por ciento, promedio. Venezuela también desaceleró fuerte su ritmo de crecimiento económico en los años no-

venta, para pasar a un crecimiento negativo en 2000-2003.

El nivel de ingreso per cápita promedio del grupo andino está alrededor de US\$2.000 (promedio 2000-2003, ver Cuadro 9) por debajo del promedio Latinoamericano de US\$3.900 para el mismo año.

Cuadro 9. PIB PER CÁPITA EN LOS PAÍSES ANDINOS 1970-2003
(Dólares a precios constantes de 1995/número de personas)

Países	1970-1989	1990-1995	1995-1999	1990-1999	2000-2003 ^a
Bolivia	934,0	868,0	940,6	900,5	937,1
Colombia	1815,5	2229,9	2382,6	2289,2	2285,3
Ecuador	1367,4	1530,1	1538,4	1530,7	1740,5
Perú	2734,3	2199,5	2579,4	2351,4	2355,0
Venezuela	3523,0	3258,8	3179,6	3227,1	2856,0
Grupo Andino	2074,8	2017,2	2124,1	2059,8	2034,8
Latinoamérica	3325,2	3455,0	3708,7	3570,1	3846,1

^a 2003 estimaciones preliminares.

Fuente: Cepal y Celade.

²⁴ Ver Ocampo (2004) para un análisis del desempeño económico de Colombia en años recientes.

²⁵ La historia individual de la evolución de la economía de cada país andino se cuenta en los documentos de país en el proyecto Economía Política de la Región Andina.

IV. INTERPRETACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GOBERNABILIDAD DE LOS PAÍSES ANDINOS

En línea con el marco conceptual de la sección II y el análisis empírico de la sección III podemos resaltar tres factores principales que son importantes para explicar los patrones de gobernabilidad observados en la región andina:

- Características del sistema político.
- Debilidades del Estado.
- El impacto de alta desigualdad y la estructura étnica.

A. El sistema político

Una hipótesis es que los problemas de gobernabilidad de la región andina estarían asociados a la naturaleza de su sistema político. En efecto el régimen presidencial rige a todos los países andinos. Como se mencionó anteriormente, los sistemas presidenciales tienden a estar asociados (más que los regímenes parlamentarios) con una mayor frecuencia de crisis presidenciales que en algunos casos llevan a "crisis de regímenes" es decir, al colapso de la democracia y la ruptura del orden constitucional. Este argumento tiene cierta validez aunque necesita ser calificado. Todos los países andinos tienen regímenes presidenciales pero hay diferencias importantes al interior del grupo andino en la frecuencia de crisis presidenciales. Los países con mayor frecuencia de crisis políticas y crisis del régimen democrático, en los últimos 50 años son Bolivia, Ecuador y Perú. Esta incidencia de crisis es menor en Colombia y Venezuela. Por otra parte no todos los países que tienen regímenes presidenciales (en desarrollo y desarrollados) exhiben el mismo nivel de crisis políticas de los países andinos.

Otro indicador de inestabilidad de las reglas del juego es la alta frecuencia relativa de reformas cons-

titucionales que se observa en el área andina (más alta que en otros países latinoamericanos y que en la *OECD*). En relación al régimen presidencial las dos últimas nuevas constituciones adoptadas en Ecuador en 1998 y en Venezuela en 1999 reforzaron la autoridad del presidente (más presidencialismo). Además estas nuevas constituciones enfrentaron el problema de la población indígena (menos importante en Venezuela que en Ecuador) otorgándole mayores derechos económicos y sociales a estas etnias. Las constituciones más recientes de Colombia y Ecuador incentivan la descentralización y un mayor acceso a servicios sociales como la educación y salud a grupos excluidos y pobres. La constitución venezolana aprobada en 1999, además de fortalecer la presidencia, buscó otorgar mayores derechos sociales a los grupos de bajo ingreso (ver Búfalo y Ríos, 2004).

Otro rasgo del sistema político de algunos países andinos es la fragmentación y el debilitamiento de los partidos políticos. Ecuador, por ejemplo, tiene más de 12 partidos políticos. Hubo un intento de cambiar esta situación en la constitución de 1998 implementando un requerimiento mínimo de votos (5 por ciento) para formar y mantener legalmente un partido político. Existe consenso entre distintos observadores que un número muy alto de partidos políticos en Ecuador, con representación de fuertes intereses regionales, hace difícil alcanzar consensos en el parlamento y en otras instancias de la política nacional (ver Hurtado y Arteta, 2004). En contraste, en Colombia y Venezuela, históricamente, el sistema político gravitó alrededor de dos partidos: liberales y conservadores en Colombia y Adeco y Copei en Venezuela. Sin embargo en años recientes estos partidos se han debilitado severamente. En Colombia la fragmentación interna afecta tanto a conservadores como a liberales. En Venezuela, la administración Chávez preside sobre la desintegración virtual de Adeco y Copei sin ser reemplaza-

dos, aparentemente por partidos o movimientos más fuertes. En Perú, el partido tradicional *APRA* sufrió a principios de los años noventa una pérdida considerable de influencia después del gobierno de Alan García (aunque García retornó con bastante apoyo en la elección presidencial de 2001, finalmente perdió frente a Toledo).

B. La hipótesis del estado débil

El estado tiene como rol fundamental proveer bienes públicos como ley y orden, infraestructura, proveer protección social y asegurar el control del territorio. Un "estado débil" es el que falla en varias de estas dimensiones con consecuencias negativas para la gobernabilidad y la prosperidad económica.

La hipótesis del estado débil es útil para entender los problemas de los países andinos, aunque el concepto no está exento de problemas. Colombia, por ejemplo, tiene altos niveles de violencia (política y criminal) y está afectada por el problema del narcotráfico. Es claro que el estado adolece de debilidades en el control del territorio y tiene grandes dificultades para controlar las actividades ilícitas. Sin embargo, al mismo tiempo, Colombia en los últimos cuarenta años ha mantenido elecciones normales y regulares, sus presidentes han completado sus periodos constitucionales y las instituciones democráticas operan, por lo general, con aparente normalidad. El estado es "débil" en algunas dimensiones de gobernabilidad pero relativamente "fuerte" en otras.

C. Desigualdad social y estructura étnica

Una tercera hipótesis que contribuye a explicar los problemas de gobernabilidad en las naciones andinas es su alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza y, en tres de cinco paí-

ses, la significativa diversidad étnica. Históricamente, durante las primeras décadas del siglo XX, estos países eran sociedades predominantemente rurales con una estructura de propiedad de la tierra y con considerable desigualdad económica y social, fenómeno, este último, que predomina hasta nuestros días. La desigualdad era principalmente un fenómeno rural asociado al patrón prevaeciente de tenencia de la tierra (Torpe, Rose Mary, 200). A medida que tuvieron lugar los procesos de urbanización y de migración rural-urbana, con una mayor intensidad desde mediados del siglo XX, seguidos por el desarrollo de las manufacturas locales, la expansión del estado y la adopción de políticas de sustitución de importaciones, surgió una clase media (variando en tamaño e importancia entre países) que ayudó a estabilizar estas sociedades. En este nuevo escenario, la desigualdad social ha permanecido, esta vez más asociada a la desigualdad en la propiedad del capital productivo, el acceso al crédito y a la educación, además de un bajo acceso al poder político de los grupos populares. Como se mencionó anteriormente, varias vertientes de la teoría social, incluyendo los recientes modelos de crecimiento endógeno, predicen que los países con mayor inequidad tienden a tener niveles más altos de conflicto social, polarización e inestabilidad política y por ende un menor crecimiento económico que países más igualitarios (Solimano, 1998; Alesina y Rodrick, 1994; Persson y Tabellini, 2000). Esta predicción se ha observado en el área andina.

Además, como se ha indicado, Bolivia, Ecuador y Perú cuentan con un grado importante de diversidad étnica. Como lo muestra el Cuadro 6 entre 34 y 59 por ciento de la población en estos tres países tienen origen indígena. Gray Molina y Chávez (2004) muestran que sólo 58 por ciento de la población de Bolivia habla español, seguido por el Quechua (22,9 por ciento), Aymará (15,7 por cien-

to) y otras lenguas²⁶. En Bolivia, el patrón de participación de la población indígena en la vida cívica nacional pasó de la exclusión y marginalización a la exigencia activa de los derechos étnicos y reclamos nacionalistas como los del Nacionalismo Aymará. También los candidatos presidenciales apoyados por varios grupos indígenas obtuvieron una alta votación en la última elección presidencial. En 2003 el movimiento indígena fue decisivo en forzar la salida del presidente Sánchez de Losada.

En Ecuador, el movimiento indígena se convirtió en un importante actor político en 1998 y 1999 lo que eventualmente afectó la estabilidad de la administración del presidente Mahuad. El Conaie, la más grande confederación de población indígena de Ecuador, impulsó varias jornadas de protesta masiva en 1999 que culminaron en enero de 2000 con una sublevación indígena a la que se unieron miembros del ejército para pedir la salida del presidente Mahuad, que finalmente fue derrocado. El punto más importante es que los grupos indígenas se han convertido en fuerzas sociales y políticas importantes en varios de los países andinos. Estos movimientos indígenas exigen derechos civiles y económicos y demandas nacionalistas y de autonomía.

V. OBSERVACIONES FINALES

El área andina es una región con amplios recursos naturales, valiosos activos humanos y físicos y un importante potencial de desarrollo económico. Sin embargo la región tiene una estructura social diferenciada y conflictiva, con significativos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión y con estados débiles en varias de sus dimensiones. Estas características de estructura social y gobernabilidad clara-

mente son una traba para realizar el potencial de desarrollo económico de la región.

Las condiciones de gobernabilidad de los países andinos, que varían de país a país, se han caracterizado por la inestabilidad política, frecuencia de reformas constitucionales, crisis presidenciales, volatilidad en las instituciones democráticas y violencia. La evidencia empírica sobre la calidad de las instituciones ubica a la región andina en lugares inferiores al promedio de América Latina en los ranking internacionales de calidad institucional.

Este trabajo propone un marco conceptual para entender los problemas de gobernabilidad de la región basado en tres categorías principales: i) el régimen político-constitucional, ii) el funcionamiento de las instituciones de nivel intermedio y iii) los niveles de conflicto social, inequidad y diversidad étnica. El análisis destaca la importancia del régimen político en la frecuencia de crisis políticas y de régimen. Al nivel de instituciones intermedias, se destacan los complejos problemas de principal-agente, combinados con problemas crónicos de captura de rentas, corrupción y violencia, que debilitan el estado y posponen la prosperidad económica. La desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza aunque no es un fenómeno nuevo en la región andina (o en Latinoamérica) lleva asociada conflictividad social, polarización política y lento crecimiento económico, aunque la dinámica de dicha relación no es simple. Políticas que busquen un acceso más igualitario al capital, al crédito, a la educación, y a la representación política pueden tener repercusiones positivas en términos de estabilidad y mayor crecimiento económico en el largo plazo. La diversidad étnica es otro rasgo social importante en países como Bolivia, Ecuador y Perú que debe ser abordado con reformas políticas y económicas creativas e inclusivas del compo-

²⁶ De acuerdo al último censo de población publicado (1992).

nente étnico. El análisis de este trabajo sugiere que para alcanzar el potencial de crecimiento económico de la región andina es necesario no solo atacar los determinantes tradicionales del crecimiento

sino también enfrentar los complejos problemas políticos, institucionales y de la estructura social de estos países.

BIBLIOGRAFÍA

- Acemoglou, D. (2002), "Why not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics, *NBER Working Paper* No. 9377.
- Aghion, P., A. Alesina and F. Trebbi (2002), "Endogenous Political Institutions" *NBER Working Paper* No. 9006.
- Alesina, A. and D. Rodrik (1994), "Distributive Politics and Economic Growth" *Quarterly Journal of Economics* 109 (May) : 465- 465-90
- Alesina, A., S. Ozler, N. Roubini and S. Swagel (1996), "Political Instability and Economic Growth" *Journal of Economic Growth* 1(2):189-211.
- Aron, J. "Growth and Institutions: A Review of the Evidence" *The World Bank Research Observer*, vol. 15, No.1.
- Arteta, G. and O. Hurtado (2004), "Political Economy of Ecuador: The Quandary of Governance and Economic Development " chapter 6 in *Political Crises, Social Conflict and Economic Development*, A. Solimano, editor, en preparación.
- Barro, R. (1991), "Economic Growth in Cross Section of Countries" *Quarterly Journal of Economics* 106(2): 407- 43.
- (1996), "Democracy and Growth" *Journal of Economic Growth* 1(1): 1- 27.
- Beckerman, P. and A. Solimano (eds) (2002), *Crisis, Dollarization and Social Impact. The Case of Ecuador*. Directions in Development, The World Bank.
- Buchanan, J. and G. Tullock (1962), *The Calculus of Consensus*, University of Michigan Press.
- Clague, C., P. Keefer, S. Knaack and M. Olson (1996), "Property and Contracts Rights in Autocracies and Democracies" *Journal of Economic Growth* 1(2): 243-76.
- Coppedge, M. (1994), "Venezuela: Democratic Despite Presidentialism" in J. Linz and A. Valenzuela Eds. *The Failure of Presidential Democracy*, The Johns Hopkins University Press.
- Collier, P. (2000), "Rebellion as a Quasi-Criminal Activity" *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 6:839-853.
- (2001), "Ethnic Diversity: An Economic Analysis" *Economic Policy* 32, April:129-166.
- Collier, P. and A. Hoeffler (2002), "Greed and Grievance in Civil War" *Quarterly Journal of Economics*.
- Cooter, R. D. (2000), *The Strategic Constitution*, Princeton University Press.
- Del Bufalo, E. And G. Ríos (2004), "Venezuela: From Stability to Turmoil" in *Political Crises, Social Conflict and Economic Development*. The Andean Region, Chapter 8, en A. Solimano, editor (en preparación).
- De Gregori, I. (1998), "Ethnicity and Democratic Governability in Latin America: Reflections from Two Central Andean countries" in F. Aguero and J. Stark (1998) *Fault Lines in Democracy in Post-Transition Latin America*, North- South Center. .
- Dixit, A. (1996), *The Making of Economic Policy. A Transaction Costs Politics Perspectives*. MIT Press.
- (2001a), "Some Lessons from Transaction Costs Politics for Less-Developed Countries" *mimeo*, Princeton University.
- (2001b), "On Modes of Economic Governance" *mimeo*, Princeton University.
- Drazen, A. (2000), *Political Economy in Macroeconomics*. Princeton University Press.
- Easterly, W. and R. Levine (1997), "Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions" *Quarterly Journal of Economics* 112 (4) :1203-50
- Eclac (2002), *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. United Nations, Santiago, Chile.
- Gray- Molina, G. and G. Chávez (2004), "The Political Economy of the Crises in the Andean Region: The Case of Bolivia" chapter 4, en *Political Crises, Social Conflict and Economic Development. The Andean Region*. A. Solimano, editor, (en preparación).
- Handa, A. and A. Glassman (2004), "Poverty, Inequality and Ethnic Conflict in the Andean Region" Chapter 3, en *Political Crises, Social Conflict and Economic Development. The Andean Region*, A. Solimano, editor (en preparación).
- Hartlyn, J. (1994), "Presidentialism and Colombian Politics" in J. Linz and A. Valenzuela editors *The Failure of Presidential Democracies*. The Johns Hopkins University Press.
- Hayek, F. (1960), *The Constitution of Liberty*, The University of Chicago Press.
- Hofman, A., A. Solimano and C. Aravena (2004), "Economic Growth in the Andean Region: The Role of Economic and Governance Factors", Cepal.
- Inter-American Development Bank,(2000), *Development Beyond Economics*, Economic and Social Progress, 2000 Report.
- Jaramillo, M. and J. Saavedra (2004), " Governance and Economic Performance in Peru in the 1990s" chapter. 7 en *Political*

- Crises, Social Conflict and Economic Development. The Andean Region. A. Solimano, editor, (en preparación)
- Krueger, A. (1974), "The Political Economy of the Rent Seeking Society" *American Economic Review* 64, 291-303.
- Knack, S. and P. Keefer (1995), "Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures" *Economics and Politics* 7 (3) :207-27.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer and R. Vishny (1998), "The Quality of Government" *National Bureau of Economic Research Working Paper Series* 6727.
- Mainwaring, S. and T. Scully (1997), *La Construcción de Instituciones Democráticas. Sistema de Partidos Políticos en América Latina*. Cieplan, Santiago-Chile.
- Marx, Karl (1967[1872]) *Capital* (3 vols.) New York: International Publishers.
- (1971), *Writings on the Paris Commune*. Edited by H. Draper: International Publishers.
- Mauro, P. (1995), "Corruption and Economic Growth" *Quarterly Journal of Economics* 110(3): 681-712.
- Ocampo, J.A. (2004) "The Economy, Conflict and Governance in Colombia" chapter 5 en *Political Crises, Social Conflict and Economic Development, The Andean Region*. A. Solimano, editor, (en preparación).
- Olson, M. (2000), *Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*. Basic Books.
- Montesquieu, C. (1748), *The Spirit of Laws*, Paris.
- North, D. "A Transaction Costs Theory of Politics" *Journal of Theoretical Politics* 2(4): 355-367.
- (1991), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* Cambridge University press.
- Kaufman, D., A. Kraay and P. Zoido-Lobaton (2002), "Governance Matters II" *Policy Research Working Paper* 2772, The World Bank.
- (1999), "Governance Matters" *Policy Research Working Paper* 2196, The World Bank.
- Linz, J. and A. Valenzuela (1994), *The Failure of Presidential Democracies: The Case of Latin America*. Johns Hopkins University Press.
- Olsen, M. (2000), *Power and Prosperity, Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*, Basic Books.
- Pindyck, R. and A. Solimano (1993), "Economic Instability and Aggregate Investment" in O. Blanchard and S. Fischer. NBER Macroeconomic Annual 1993, The MIT Press.
- Porter, M., J. Sachs, P. Cornelius, J. Mc Arthur and K. Schwab (2002), *The Global Competitiveness Report 2001-2002*, World Economic Forum and Harvard University.
- Przeworski, A. (1990), *The State and the Economy Under Capitalism*. Fundamentals of Pure and Applied Economics, Marxian Economics Series, Harwood Academic Publishers.
- Rolland, G. (2002), "The Political Economy of Transition" *The Journal of Economic Perspectives*, Winter, vol. 16, 1: 29-50.
- Serven, L. and A. Solimano ,editors, (1993), *Striving for Growth after Adjustment. The Role of Capital Formation*. The World Bank Regional and Sectoral Studies.
- Solimano, A. editor, (1998), *Social Inequality. Growth, Values and the State*. The University of Michigan Press.
- Solimano, A. editor, (2000), *Colombia. Essays on conflict, Peace and Development*. The World Bank.
- Solimano, A. (2004) editor *Political Crises, Social Conflict and Economic Development. The Andean Region*. En Preparación.
- Taylor, L. (1991), *Income Distribution, Inflation and Growth: Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory*, The MIT Press.
- Thorpe, R. (2000), *An Economic History of Latin America in the 20th Century*. Inter-American Development Bank.
- Tommasi, M. (2002), "Crisis, Political Institutions and Policy Reform". Paper presented at the 4th World Bank ABCDE, conference held in Oslo, Norway, June 24-26, 2002.